

Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Proyecto de Orden por la que se regula el Registro de Funcionarios Habilitados, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúmpleme informarle lo siguiente:

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

Dicho lo anterior, el Proyecto sometido a informe tiene por objeto, según indica su artículo 1.1 “la regulación del funcionamiento del Registro de los funcionarios habilitados en la Administración General del Estado y sus organismos públicos para la identificación y autenticación de los ciudadanos, conforme a lo establecido en el artículo 16 del Real decreto 1671/2009, de 6 de noviembre”.

A tal fin el Proyecto atribuye la gestión del Registro a la Dirección General para el impulso de la Sociedad de la Información, siendo cada Ministerio responsable de inscribir y mantener actualizada la relación de los trámites y actuaciones de su competencia autorizados para los que sea la habilitación incorporada al Registro.

Asimismo, el artículo 4 regula el funcionamiento del Registro estableciendo a quién corresponde instar la notificación de los funcionarios habilitados, la vigencia temporal de las habilitaciones, su suspensión en su caso y la vinculación del Registro con el Registro Central de Personal, y el artículo 6 se refiere a su contenido, con indicación de los datos de los funcionarios habilitados que serán objeto de inscripción.

El acceso al Registro, a través de medios electrónicos, se regula por el artículo 7, atribuyéndose el mismo a los Departamentos Ministeriales y Organismos públicos, para la actualización y consulta de los trámites de su competencia y de las habilitaciones de sus funcionarios, así como para la consulta de todos los eventos del sistema referidos a los funcionarios habilitados a trámites de su competencia en una determinada fecha.



Los artículos 5 y 8 se refieren a los ciudadanos objeto e identificación y autenticación por los funcionarios habilitados, estableciéndose que los mismo deberán prestar su consentimiento expreso para ello, cumplimentando y firmando el formulario aportado como Anexo I y que en todo caso “deberá constar el consentimiento del ciudadano al tratamiento automatizado de sus datos que resulte necesario para el adecuado funcionamiento del Registro de funcionarios habilitados.

Finalmente, de conformidad con el artículo 9 del Proyecto, se crea en el Anexo III el fichero “Registro de funcionarios habilitados” del que será responsable la Secretaría de Estado para la Función Pública.

En relación con el mencionado Anexo, se indica que la finalidad del Registro es la de “gestionar los datos de habilitación de funcionarios” a la que se acaba de hacer referencia, añadiendo que el Registro contendrá datos de “ciudadanos que soliciten la representación de un funcionario habilitado para trámites por medios y actuaciones electrónicos y funcionarios a los que se otorgue la autorización, conteniendo los datos de NIF, nombre y apellidos y permitiéndose las cesiones contempladas por el artículo 7 del Proyecto.

El artículo 22.1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, dispone que “en los supuestos en que para la realización de cualquier operación por medios electrónicos se requiera la identificación o autenticación del ciudadano mediante algún instrumento de los previstos en el artículo 13 de los que aquel no disponga, tal identificación o autenticación podrá ser válidamente realizada por funcionarios públicos mediante el uso del sistema de firma electrónica del que estén dotados”, añadiendo en el apartado 2 del precepto que “para la eficacia de lo dispuesto en el apartado anterior, el ciudadano deberá identificarse y prestar su consentimiento expreso, debiendo quedar constancia de ello para los casos de discrepancia o litigio”. Finalmente, se dispone en el artículo 22.3 que “cada Administración Pública mantendrá actualizado un registro de los funcionarios habilitados para la identificación o autenticación regulada en este artículo”.

En el ámbito de la Administración General del Estado, el artículo 16.1 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, dispone que “para llevar a cabo la identificación y autenticación de los ciudadanos por funcionario público conforme a lo previsto en el artículo 22 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, en los servicios y procedimientos para los que así se establezca, y en los que resulte necesaria la utilización de sistemas de firma electrónica de los que aquéllos carezcan, se requerirá que el funcionario público habilitado esté dotado de un sistema de firma electrónica admitido por el órgano u organismo público destinatario de la actuación para la que se ha de realizar la identificación o autenticación. El ciudadano, por su parte, habrá de identificarse ante el funcionario y prestar consentimiento expreso, debiendo quedar constancia de ello para los casos de discrepancia o litigio”, añadiendo el artículo 16.2 que “el Ministerio de la



Presidencia mantendrá actualizado un registro de los funcionarios habilitados en la Administración General del Estado y sus organismos públicos para la identificación y autenticación regulada en este artículo. Mediante el correspondiente Convenio de colaboración podrá extender sus efectos a las relaciones con otras Administraciones públicas”, debiéndose regular el mismo a través de la Orden Ministerial a la que se refiere el artículo 16.3, sin perjuicio de que, conforme al artículo 16.4 “los Departamentos Ministeriales y organismos públicos podrán habilitar funcionarios públicos en ellos destinados para identificar y autenticar a ciudadanos ante dicho Departamento ministerial u organismo público”.

De este modo, el tratamiento de los datos de los funcionarios habilitados en el Registro objeto de regulación por el Proyecto sometido a informe traería su causa de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, en conexión con el artículo 22 de la Ley 11/2007 a la que se acaba de hacer referencia.

Del mismo modo, al ser preciso ostentar la habilitación para que proceda la adecuada identificación y autenticación requerida al funcionario, los accesos a los que se refiere el artículo 7 del Proyecto se encontrarían amparados por las letras a ) y c) del artículo 11.2 de la Ley Orgánica 15/1999.

Por otra parte, como se ha dicho, el Anexo I del Proyecto incluye el formulario de consentimiento del ciudadano para su identificación y autenticación, incluyendo una cláusula por la que se informa de que sus datos se incorporarán al Registro de Funcionarios Habilitados, si bien no se aclara la finalidad de dicho tratamiento ni los posibles destinatarios de la información.

Ello plantea el problema de la discordancia existente entre el articulado del Proyecto y el contenido del mencionado Anexo y del propio Anexo III, puesto que si bien el contenido del articulado prevé que el Registro incorporará los datos de los funcionarios, siendo su finalidad la delimitación de los que se encuentran habilitados para la identificación y autenticación de los ciudadanos, finalidad que se reproduce a su vez en el citado Anexo III, del contenido establecido en este Anexo se deriva que la finalidad del Registro excederá de la declarada, incorporando la información referida a los ciudadanos efectivamente identificados y autenticados, cuyos datos serán efectivamente incluidos en el fichero.

De este modo, y sin que ello suponga considerar que el tratamiento de los datos de los ciudadanos en el registro no resulte amparado por la Ley Orgánica 15/1999, sería necesario modificar el Proyecto en el sentido de o bien excluir la información de los ciudadanos de dicho Registro, lo que implica modificar la referencia a esa inclusión contenida en el Anexo I y las efectuadas por su parte por el Anexo III, o bien modificar el articulado del Proyecto en el sentido de especificar que el registro incorporará información de los ciudadanos identificados y autenticados y que su finalidad será igualmente la de acreditar la

efectiva identificación y autenticación llevada a cabo, estableciendo asimismo el procedimiento de inclusión de las identificaciones y autenticaciones realizadas y los posibles accesos que pudieran realizarse respecto de esos datos; en los mismos términos deberían modificarse los correspondientes apartados del Anexo III del Proyecto.

De este modo, sólo será posible la emisión de un informe favorable al Proyecto en caso de que se proceda a su modificación para lograr la correlación entre la finalidad y contenido del Registro en los términos establecidos en su articulado y la que se deriva de su Anexo, a fin de que pueda valorarse la existencia de una adecuada legitimación para el tratamiento de los datos de los ciudadanos objeto de identificación y autenticación.